

El Estado y los movimientos sociales Transformaciones recientes en la relación

Martín Cortés

La presente ponencia se propone introducir algunas reflexiones para debatir en torno a la relación entre el Estado y las organizaciones sociales en la Argentina contemporánea. Por tratarse de un tema en sí inabarcable, nos abocaremos en realidad a ensayar algunas aproximaciones alrededor del modo en que los diferentes sectores del arco de movimientos piqueteros de origen urbano (particularmente concentrados en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores) se han posicionado en el último año respecto del gobierno presidido por Néstor Kirchner.

No es el objetivo de este trabajo el de construir una tipología empírica y exhaustiva de movimientos sociales según su relación con el gobierno, sino más bien el de obtener conclusiones de índole analítica respecto de la capacidad de interpelación del discurso del presente gobierno. Con ello pretendemos indagar en los reordenamientos del mapa de movimientos piqueteros en función de contribuir a un debate en torno a la necesidad de éstos de mantener un margen de autonomía respecto del Estado para lograr sus objetivos políticos.

Cabe aclarar que no se trata de una investigación acabada, sino en pleno proceso de realización. En tal sentido, no pueden adelantarse conclusiones cerradas sino tan sólo líneas e interrogantes a ser profundizados. En primer lugar, nos abocamos a historizar brevemente el modo en que la hegemonía de los sectores dominantes se recompuso en la Argentina luego del “peligro” que pareció acecharla en 2001; aún cuando puedan notarse cambios en la composición de los bloques más fuertes dentro de dichos sectores (lo cual incluso debiera discutirse en profundidad y con conocimientos concretos al respecto). Para esto, consideramos central la novedosa relación que se establece entre el gobierno y los movimientos sociales, donde sostenemos que el importante apoyo que aquél mantiene está dado por la efectiva recuperación (parcial o, mejor dicho, institucional) de la energía social liberada en diciembre de 2001, tanto en forma como en contenido. En contenido, en tanto buena parte de los reclamos directos de quienes protagonizaron las ya célebres “históricas jornadas” son de algún modo parte fundamental de la agenda estatal (Vg. Derechos Humanos, etc.), aun cuando nuestro análisis también pretende dar cuenta de qué ocurre con aquellos reclamos una vez que pasan por el Estado (¿cómo se transforman? ¿qué sucede con su radicalidad inicial?). En cuanto a la forma, las apariencias confrontativas también pueden deber su génesis a un momento social de profunda conmoción y belicosidad que el Estado debe tratar de algún modo, aunque más no sea para recuperar su lugar de privilegio en la dirección de la sociedad argentina, que se vio amenazado por los picos de participación social de aquellos meses que siguieron a diciembre de 2001. La fortaleza del presente gobierno no radica solamente en la opinión pública, la imagen positiva y demás elementos dignos de la politología liberal, sino también en el apoyo político de una cantidad importante de sectores activos del campo popular, muchos de ellos provenientes del arco piquetero (los llamados “piqueteros oficialistas”). Este apoyo es una preocupación permanente del gobierno, que realiza políticas activas para reafirmarlo y perpetuarlo. Las mismas tienen por efecto tanto el alineamiento de determinados sectores como la división de otros a partir de los desacuerdos respecto del carácter del actual proceso. Nuestro propósito es el análisis de dichos efectos poniendo particular atención en el problema de la

autonomía que los movimientos mantienen respecto del Estado, considerando que ella es la que puede permitir distinguir entre procesos de transformación real y de recomposición hegemónica, ya que de ella depende, como intentaremos demostrar, la capacidad de las organizaciones de los sectores populares de imponer sus propios proyectos y de no ser absorbidos por elementos tradicionales.

Diciembre de 2001: hegemonía en peligro

Las jornadas de diciembre de 2001 -conocidas popularmente como el “argentinazo”-, han sido caracterizadas de la más diversa manera, con importantes diferencias en cuanto a la espontaneidad o preparación de las mismas. En cualquier caso, podríamos caracterizarlas como *insurrección de masas*, fundamentalmente contra las políticas gubernamentales, implicando en términos históricos un punto de “no retorno”. Con ella se cerraría definitivamente un ciclo iniciado -a escala nacional- el 24 de marzo de 1976 con el terrorismo de Estado, y continuado (más allá de los avances y retrocesos) durante los sucesivos gobiernos civiles de Alfonsín, Menem y De la Rúa a lo largo del cual los sectores subalternos no logran trascender, más allá de breves interregnos, su accionar defensivo.

Los meses que siguieron a diciembre se caracterizaron por una alta participación social directa, diferenciada tanto de los actores tradicionales como del Estado. La brecha fundante de las sociedades modernas entre Estado y sociedad se veía debilitada en favor de la segunda. A pocos días de asumir, el propio presidente Duhalde afirmaba: “con las asambleas en la calle no se puede gobernar”. Si bien estos picos de participación tendieron a reducir su protagonismo, la “normalización” de la situación no fue sencilla y contuvo momentos de gran tensión social, como la masacre de Puente Pueyrredón en junio de 2002, que aceleró los tiempos electorales frente a una sociedad que no parecía tolerar la recomposición represiva de los mecanismos estatales.

El problema pendiente del Estado era, entonces, la recuperación de su rol monopólico de la gestión social y en esa dirección puede leerse el surgimiento de la figura de Néstor Kirchner, presentado como ajeno a las políticas neoliberales de la década previa e intentando hacer propios los reclamos que la sociedad en movimiento había puesto sobre el tapete.

Argentina desde el 2003: el Estado vuelve a su lugar

El gobierno del Presidente Néstor Kirchner, llegado al poder en mayo de 2003, con un 22% de caudal de votos y una fuerte dependencia de la estructura política del presidente anterior, Eduardo Duhalde, ha sustentado la fuerte legitimidad de la que goza hoy en día en recuperar algunas de las consignas y demandas que las jornadas de diciembre de 2001 habían instalado. Así, ha habido importantes cambios en la Corte Suprema, una política progresiva en el ámbito de los Derechos Humanos y un cambio de rumbo, al margen de cómo se lea, en lo que atañe a la relación con los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial).

Sin embargo, tanto el presidente como la mayoría de funcionarios y grupos afines y cercanos al gobierno actual provienen de sectores tradicionales de la política partidaria argentina, en muchos casos ligados al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y, con ello, al proceso de privatizaciones e implementación de políticas de corte neoliberal en

el país. De manera que el gobierno actual no sería un emergente propio de los procesos de autoorganización y resistencia surgidos en la década de 1990 y fortalecidos (y visibilizados) a partir de diciembre de 2001, sino más bien un actor externo a ellos que ha tomado como propias algunas de sus demandas, ya que incluso su partido de proveniencia fue, en aquellas jornadas, uno de los blancos predilectos del rechazo popular.

Por otro lado, la crisis de representación que estalló en el 2001 ha debilitado profundamente la capacidad de los actores políticos tradicionales (partidos y sindicatos) de canalizar las demandas de los sectores populares. El amplio espectro de agrupaciones piqueteras (tengan o no relación con dichas organizaciones) ha intentado, de alguna manera, llenar ese vacío, mediante la organización de desocupados. Sin embargo, no han logrado formar un espacio político que les permita imponer temas propios en la agenda pública (mucho menos lograron presentarse ellos mismos como una alternativa de poder). Este cuadro, sumado a la improbable solución en el corto plazo, por parte del Estado, de las problemáticas sociales que les dieron origen, produce una situación de particular tensión en la relación entre este tipo de organizaciones y la esfera estatal. Se puede observar una multiplicidad de medidas represivas sobre los actores más radicalizados (hoy concentradas en procesos judiciales más que en actos de violencia estatal explícita) y, paralelamente, aparecen fuertes signos de integración de agrupaciones más propensas a la conciliación.

De este modo, la afinidad entre determinadas políticas gubernamentales y algunos sectores del movimiento popular en general ha significado modificaciones en el mapa de las organizaciones de los sectores populares, implicando quiebres, divisiones, fusiones, etc., en buena medida a causa del posicionamiento respecto del gobierno actual. El objeto de nuestra reflexión es, entonces, la relación de *nuevo tipo*, en comparación con los gobiernos previos, que se establece entre el Estado y los movimientos sociales a partir del gobierno de Kirchner.

Coincidimos con Elías (2006) en que “para dar viabilidad a un proyecto alternativo es necesaria la movilización, participación y autonomía de movimientos sociales, viejos o nuevos, respecto a los gobiernos definidos como progresistas”. Proponemos entonces considerar este criterio como la demarcación entre la construcción de un proyecto alternativo, crítico e incluso anticapitalista y, por otro lado, un cambio, aunque progresivo, en el carácter y el contenido de los sectores dominantes que no trastoca los pilares más profundos de una sociedad. La cooptación del conflicto y los múltiples mecanismos clientelares pueden inscribirse en este modelo de, en términos de Gramsci, revolución pasiva (Gramsci, 2003:83-90). El autor meridional piensa esta idea en relación con los movimientos de masas que, en el desarrollo del proceso del *Risorgimento*, fueron finalmente dirigidos por los partidos tradicionales, frente a la debilidad de las fuerzas radicales populares de tener clara conciencia de los objetivos propios y su antagonismo respecto de los de los partidos “del orden”. De esta manera, la fragmentación de las organizaciones populares y su dificultad para articular un proyecto amplio que pueda contener la multiplicidad de aspiraciones de todas ellas, es un factor que facilita la aparición de sectores externos que capitalicen la fuerza movilizadora de éstas. La disputa se da, de este modo, por la hegemonía del proceso político, cuyo logro por parte de los sectores subalternos sólo puede ser producto de la autonomía respecto de los sectores dominantes y del Estado en tanto instancia de concentración del poder de éstos.

En este trabajo, entonces, analizamos la relación entre los movimientos sociales y el Estado a la luz de una hipótesis guía:

La profundidad de un proceso de transformación depende de la autonomía organizativa y política-ideológica de las organizaciones de los sectores populares respecto del gobierno y del Estado.

¿Por qué es necesario que los movimientos guarden autonomía respecto de los gobiernos? Esta pregunta parece más que pertinente en una coyuntura latinoamericana donde algunos de estos demuestran pretensiones realmente transformadoras (como puede ser el caso de Venezuela y Bolivia, a diferencia quizá de Argentina y Brasil). Consideramos esta necesidad teniendo en cuenta la noción de *garantía* de los procesos transformadores, ya que la vitalidad de la construcción política de los movimientos sociales es el resguardo frente al carácter problemático de la transformación social por la vía estatal, particularmente en Estados periféricos. Allí, por la centralidad y complejidad que estos asumen en tanto articuladores de la formación social capitalista¹, la ocupación de cargos de gobierno no es garantía del manejo de resortes centrales de la actividad social. Este problema actualiza la clásica distinción marxista entre poder de Estado y aparato de Estado (Althusser, 1997). Una variedad de casos latinoamericanos confirman que la llegada de sectores populares a determinados aparatos de Estado, por más relevantes y centrales que parezcan, no garantiza la posesión efectiva del *poder del Estado* (quizá la experiencia histórica más demostrativa de este problema sea el caso del gobierno de Salvador Allende en Chile, entre 1970 y 1973), que fluctuó hacia sectores como las fuerzas armadas en connivencia con corporaciones sindicales y empresariales.

Asimismo, la capacidad estatal de internalizar el conflicto, sobre la que volveremos luego, es siempre un condicionante de la acción de los movimientos, que se ven constantemente compelidos (pocas veces es una opción) a establecer lazos que hieren su capacidad de acción. Tales pueden ir desde la ayuda social supeditada a determinadas tareas, las formas impuestas de organización a la hora de acceder a subsidios (al margen de que no se las respete, las cooperativas, asociaciones civiles y demás introducen formas jerárquicas de división del trabajo) hasta la represión velada o explícita, que también es una forma del Estado de lidiar con el conflicto. Todas estas dificultades constituyen permanentes desafíos a los movimientos, y poseen una importante fuerza desarticuladora, sustentada en la asimetría de recursos materiales y, en muchos casos, simbólicos. La capacidad de sostener niveles de autonomía por parte de los movimientos es lo que asegura el establecimiento de tiempos y lenguajes políticos propios, sin que esto implique desconocer la existencia del Estado o negar la relación con él, sino tan solo la decisión política de no subordinar el proyecto propio a la lógica estatal.

De manera que la autonomía de los movimientos es lo que garantiza que sigan siendo tales y que no *devengan* Estado, ya que ello implicaría el congelamiento de sus potencialidades en marcos institucionales, lo que implica la asunción de otras reglas de

¹ No desarrollamos en profundidad el problema del Estado en la periferia capitalista, aunque tomamos algunas nociones centrales de autores como Evers (1989) y Zavaleta Mercado (1988, 1990), que enfatizan la centralidad del Estado en la conformación del capitalismo, e incluso de la burguesía como clase, en las regiones secundarias.

juego y, previsiblemente, la desarticulación de sus proyectos y formas de construcción primigenias. Sin embargo, la autonomía no debe significar aislamiento, ni rechazo *per se* a la relación con el Estado (dicho sea de paso, imposible) sino la posibilidad de sostener una tensión: no se puede ser puro movimiento, en la medida en que el Estado existe y su presencia atraviesa cualquier espacio político, a la vez que una integración definitiva es al mismo tiempo la desaparición del movimiento en cuanto tal. La tensión no es, entonces, otra cosa que una capacidad estratégica: de aprovechar las ventajas de la coyuntura evitando ser condicionado por las mismas. Todo esto es de suma complejidad, pues se juegan allí identificaciones simbólicas y favores materiales que ejercen un fuerte poder sobre movimientos que no siempre tienen la capacidad para resistirlas.

En este sentido, un eje determinante de la relación que se asume con el Estado es el de la democracia interna de las organizaciones. En términos generales, puede inferirse que mientras menores sean los mecanismos participativos al interior de los movimientos, mayor es el poder de los referentes y, por ende, su discrecionalidad para tomar decisiones trascendentes que definen el rumbo político de todo el espacio. Sin embargo, cabe aquí una aclaración: las falencias en la democracia interna no son privativas de las organizaciones que se han acercado al gobierno (quizá, incluso, algunas de las que se mantienen en la oposición “dura” sean considerablemente más verticales). De lo que se trata, en realidad, es de la lógica de la acción estatal. Por definición, éste no incorpora organizaciones o colectivos a su seno, sino individuos. De tal modo que se requieren fuertes discusiones y consensos internos como para dar pasos tan trascendentes como los involucrados en la aceptación de cargos públicos. Además, los tiempos estatales difícilmente coinciden con los del movimiento, por lo que puede tender a separarse ambas instancias y a producir problemas internos. Y aquí retornamos al problema central que enunciarnos al principio del trabajo: ¿Cómo puede un movimiento mantener su autonomía frente a semejante asimetría de recursos y tiempos respecto del Estado?

Los movimientos piqueteros y el gobierno

La pregunta que guía este apartado es de orden general: ¿Cuál es la relación entre el gobierno actual y los movimientos piqueteros? Desde ella no puede responderse por los casos específicos y concretos ni por el modo en que ella afecta los territorios propios de cada movimiento, ya que ambas cuestiones involucran una multiplicidad de factores que exceden la posibilidad de este trabajo (diferentes posiciones dentro de cada organización, cantidad y tipo de ayuda social recibida -incluyendo el modo en que fue conseguida-, etc.). Lo que se pretende indagar es la dimensión propiamente política de esta relación, esto es, sus efectos sobre la configuración del conflicto social.

Para cualquier expresión organizada de la izquierda, en el sentido más amplio de la palabra, resulta sencilla la postura a tomar frente a políticas como las que predominaron en la década de 1990. Allí los debates y diferencias discurrían, acaso, por los métodos de resistencia a las mismas. Algunas corrientes se recluyeron en el trabajo barrial, otras intentaron resistir en las calles como fuera necesario, etc. Pero la presente coyuntura resulta hartamente más comprometedor, ya que la recuperación “oficial” de algunos reclamos históricos de estos actores obliga a agudizar el análisis o a caer en posiciones anquilosadas de manera inmediata. Quienes parten del eje discurso/realidad, descubren falencias y gestos demagógicos. Quienes acentúan la eficacia del gobierno en interpelar

a la sociedad y pedirle a esta su alineamiento, se encuentran a sí mismos cada vez más cerca del proyecto gobernante y peligrando el propio.

Así, el punto de partida para el análisis de la relación entre Estado y movimientos piqueteros en el presente es su *complejidad*. Svampa y Pereyra (2004) hablan de relaciones peligrosas, teniendo en cuenta la sutileza del gobierno de Kirchner para combinar las diversas estrategias posibles destinadas a “integrar, cooptar, disciplinar y/o aislar al conjunto del movimiento piquetero” (pág. 212). Por otro lado, Schuster (2004) lee las políticas del gobierno actual como una “estrategia desmovilizadora”, a partir de acciones de gobierno que retoman parcialmente reclamos de diferentes movimientos y organizaciones que obligan al arco piquetero a tomar una posición al respecto, y que tienen por efecto el aislamiento de los sectores más combativos y la negociación con los más dialoguistas. Rajland y Campione (2006) analizan también las políticas gubernamentales en términos de desmovilización, agregando el rol de la ayuda social y la incorporación de sectores del movimiento piquetero a una coalición en torno a la figura presidencial como importantes factores que fragmentan el mapa de estas organizaciones. Asimismo, Borón (2005) diagnostica una fragmentación del movimiento piquetero a partir de políticas asistencialistas y de cooptación sobre referentes de importantes sectores del mismo.

Estas posiciones parecen tener de común un marcado hincapié en la dimensión “cooptativa” de las políticas oficiales más que en la producción de consenso social, quizá haciendo una lectura demasiado lineal y, por ende, que no ahonda en la experiencia concreta que los distintos sectores sociales atraviesan (vale decir: reforzar la hipótesis del engaño y la demagogia puede ser estrictamente válido, e incluso decir mucho sobre la falta de radicalidad del gobierno -que, dicho sea de paso, no queda claro por qué habría de tenerla, o por qué esperar que Kirchner instaure el socialismo-, pero poco profundiza sobre las políticas que el campo popular debe darse en procesos tan complejos como el aquí indicado).

A la hora de caracterizar los movimientos piqueteros, varios autores coinciden en que los movimientos piqueteros pueden ser distinguidos en tres ramas, de acuerdo a su matriz ideológica y tradición fundante: Schuster (2004) los denomina como vertiente sindical, partidaria y autonomista. Svampa y Pereyra (2004), por su parte, los ordenan como “populistas”, de origen peronista o nacionalista de izquierda y relacionados con el modelo organizativo sindical, izquierda tradicional (ligados a partidos de izquierda, incluso conformados, en muchos casos, como “brazos piqueteros” de los mismos) y la llamada “nueva izquierda”, con cierta relación con la tradición autónoma que podría remontarse a diversos trabajos de base que incluyen comunidades eclesíásticas tercermundistas en las décadas del sesenta y setenta, así como tomas de tierras y diferentes instancias de articulación local comunitaria. Esta tradición se ha visto actualizada por los debates dentro del marxismo en torno al poder y el Estado, que han privilegiado la construcción de territorios autónomos por sobre la confrontación directa con el poder estatal. Otras tipologías, tales como la de Mazzeo (2004) no coinciden plenamente con estos autores y abordan la cuestión desde otro ángulo. Sin embargo, tomaremos las aquí desarrolladas pues presentan ciertas líneas de continuidad con las posiciones tomadas respecto del gobierno.

A continuación caracterizaremos brevemente las tres corrientes de acuerdo a su relación con el Estado a partir de las políticas oficiales, si bien profundizaremos en la

“populista”, ya que consideramos que allí se condensan dimensiones centrales de la lógica estatal como un permanente intento por absorber y “normalizar” el conflicto social contra sectores subalternos que pretenden exceder ese límite en la construcción de un proyecto alternativo.

1.- Izquierda tradicional: el pasado en copa nueva

La izquierda tradicional argentina, sobre todo la de origen trotskista, concibe la lucha revolucionaria desde un punto de vista profundamente ortodoxo, donde el partido de vanguardia es el elemento avanzado de la clase obrera que la prepara para la conquista del poder político y su elevación como clase dominante. En tal esquema, los movimientos piqueteros surgidos hacia el final de la década pasada no podían sino ser una anomalía. Y, como tal, la reacción fue tardía. Sólo cuando su centralidad como sujeto antagónico quedó confirmada, comenzaron a surgir los movimientos piqueteros ligados a los partidos. A tal punto estos grupos son creaciones directas de los partidos frente a una coyuntura que excedía sus formas clásicas de comprender la política, que su escasa creatividad impidió, en algunos casos -PO, MST-, fundar un espacio con siglas diferentes a las del partido. Pero no es sólo una cuestión nominal. Políticamente, los espacios piqueteros no son considerados en sí mismos sino en relación con la adopción de los dogmas del partido. Es decir, el rol central y la vitalidad de las masas en los procesos de transformación social está estrictamente supeditada al control organizativo e ideológico del partido (de ahí que abunden las mezquindades de cada partido respecto de las luchas “encabezadas” por los otros, casi nunca reconocidas).

Esta izquierda incluye también al MIJD identificado con la mediática figura de Raúl Castells y, parcialmente, al MTL, ligado al Partido Comunista, que como bien lo expresara Mazzeo (2004), aparece atrapado entre algunas nociones novedosas como las de poder popular y su vinculación más que relevante con una de las organizaciones más expresivas de la izquierda tradicional argentina.

Todos estos grupos se han posicionado frente al gobierno como el ala “dura” de la oposición, remarcando una y otra vez los ejes de continuidad entre el actual mandatario y los anteriores. Parados en esta lectura, tienden a ser aislados del humor social general y hasta alentados por el gobierno en algunas de sus acciones “extremas”, por la comodidad que para él implica tenerlos de interlocutores. Así, más de una vez, se ha visto coincidir a figuras como Jorge Altamira y Raúl Castells con Mariano Grondona y Jorge Ávila en sus críticas al gobierno.

De esta manera, la opción del gobierno para con ellos es su marginación, que combina la caricaturización, el desdén por sus acciones y dosis refinadas de represión. Esta última no toma la forma de violencia abierta como lo hacía en la década pasada, sino que tiende a instalarse a través de la criminalización de la protesta (procesamientos de militantes por diferentes causas). Vale la aclaración de que no son estos grupos los únicos destinatarios de las políticas represivas, que también tuvieron y tienen un peso importante sobre los sectores de tendencia autónoma.

2.- Organizaciones de nuevo tipo: peligros y asimetrías

Las diferentes organizaciones ligadas a la denominada “nueva izquierda” constituyen quizá el caso más delicado. Han sido las que más han sufrido de divisiones y rupturas a

partir de la llegada del kirchnerismo. Quizá por no contar con la organicidad de los partidos ni la fuerza política de los movimientos de corte sindical, su situación es más frágil por cuanto cuentan con menos recursos simbólicos y materiales para resistir la fuerza desarticuladora del presente gobierno. Tanto la fuerza como la debilidad de estos movimientos radican en que se constituyeron como una forma de rearticular lazos sociales en contextos de profunda devastación. Como debilidad, marca las necesidades materiales como un eje difícil de trascender, lo que los torna vulnerables a la potencia disgregadora de la ayuda estatal, que trae siempre con ella distintas formas de condicionamiento. De allí que la necesidad de autogestionarla de manera comunitaria sea una de las banderas más características de estos espacios. Como fortaleza, las relaciones que se constituyen en los ámbitos propios de estos movimientos tienden a ser prefigurativas de aquella sociedad que se pretende construir, de manera que medios y fines no aparecen brutalmente escindidos como en la izquierda tradicional. Esto último permite una mayor reflexividad sobre la necesaria autonomía que debe mantenerse respecto del Estado.

Desde fines de los años 90 hasta nuestros días se han formado múltiples movimientos de trabajadores desocupados (MTD) en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Muchos de ellos estuvieron agrupados en los MTD Aníbal Verón. Sin embargo, ya para finales del año 2003, comienzan las divisiones a raíz de las distintas posiciones respecto del gobierno. Asimismo, un pequeño grupo de MTDs (Guernica, Solabo y Allen) se alejan asumiendo posiciones de mayor identificación con el autonomismo “radical” que circula por las discusiones de la izquierda contemporánea. Un boletín del MTD Aníbal Verón de principios de 2004 dice sobre la llegada del gobierno de Kirchner: “sabíamos que era un gobierno inteligente que no nos pegaría con represión pero sí con su política”. Hasta el final de 2003, se confluyó en algunos reclamos con Barrios de Pie y otros grupos que luego se acercarían cada vez más a las posiciones del gobierno. Las divisiones y desencuentros al interior del campo popular crecerían hasta producir fisuras que hoy parecen definitivas.

En el espacio de la “nueva izquierda” sobresale hoy el Frente Popular Darío Santillán, como organización que articula la vieja Verón con diferentes expresiones del campo popular que involucran, por ejemplo, movimientos campesinos, estudiantiles e incipientes iniciativas sindicales. El FPDS ha logrado cierta presencia sin pertenecer a la izquierda tradicional ni acercándose al gobierno, pero una multiplicidad de pequeños espacios autónomos han sido divididos (y en algunos casos virtualmente liquidados) por las discusiones internas que el kirchnerismo suscitó.

3.- Cerca del gobierno: desafíos a la autonomía

Con mayor o menor reserva, las organizaciones de tipo sindical o “populista” se acercaron al gobierno. Exceptuando a la CCC, de todos modos en el límite entre lo sindical y la izquierda tradicional por su ligazón al PCR, que ha fluctuado y hoy poco coincide con las organizaciones oficialistas, el entero arco de movimientos de esta vertiente ha ido asumiendo posiciones cada vez más comprometidas con las políticas oficiales, proveyendo en muchos casos de funcionarios a oficinas relevantes del Estado, mayormente en áreas vinculadas a políticas sociales.

Dado que este trabajo tiene como uno de sus propósitos discutir en torno a la noción de autonomía, debemos hacer un recorte respecto de las organizaciones cercanas al

gobierno, ya que algunas directamente no presentan dicha idea como una cuestión a problematizar. Tal es el caso del Movimiento Evita, que merecería un estudio aparte, por constituir más una auténtica creación de algunos sectores del gobierno que un movimiento preexistente que toma la decisión política de alinearse. Sus objetivos políticos están vinculados con la ocupación de espacios de poder en cualquiera de sus instancias, con reminiscencias simbólicas más ligadas a las pugnas intestinas del peronismo que al proyecto socialista de nación de los sectores más radicalizados del movimiento.

Quizá la FTV y Barrios de Pie sean los sectores más propiamente identificables como movimientos piqueteros con un pasado relevante en la resistencia a las políticas neoliberales y un presente de enorme identificación con el gobierno y un grado importante de integración al mismo. Pero también aquí cabe una diferencia no menor. La FTV, como la CTA que conforma, es un paraguas de una multiplicidad de organizaciones no necesariamente coincidentes ni en el programa ni en la práctica. Coexisten, de hecho, organizaciones anticapitalistas con otras de visiones más cortoplacistas y contemporizadoras con el integracionismo. La FTV fue precursora de los piquetes en la zona de La Matanza, del mismo modo que luego lo sería de los llamados “piqueteros oficialistas”. Su incorporación a las posiciones del gobierno fue casi sin condiciones ni miramientos y con un alineamiento discursivo muy fuerte, siempre visible en las explosivas declaraciones de su principal referente, Luis D’Elía.

El Movimiento Barrios de Pie (MBP), por su parte, nació en diciembre de 2001 como producto de la decisión política de Patria Libre² (CPL) de construir un frente orgánico de desocupados. Así, los orígenes de la organización pueden rastrearse varios años antes de su conformación como tal. Su estructura de trabajo barrial se monta sobre las múltiples iniciativas abiertas por CPL en los años previos. La historia de ésta puede darnos una idea sobre las prácticas y discursos que hoy ubican al movimiento tan cercano al gobierno de Néstor Kirchner.

Patria Libre surge a partir del nucleamiento de viejos militantes del ERP de la provincia de Córdoba. Si bien allí tal organización acarrea una tradición muy cercana al nacionalismo revolucionario (incluso al peronismo), de ningún modo puede hablarse de que el origen de CPL sea peronista. Durante los años noventa, su principal bandera fue la reivindicación del Che Guevara y, en menor medida, de Mario Roberto Santucho, es decir, una recuperación de la tradición de la lucha armada revolucionaria de las décadas del sesenta y setenta. Durante toda la década de 1990, el trabajo barrial de la organización se acercó crecientemente a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en aquel momento ferviente opositora de las políticas de Carlos Menem. Esto se profundizó de tal manera que hacia el año 99, la juventud de Patria Libre comenzó a trabajar en los barrios como “Juventud de la CTA”. Para esa misma época, las tendencias de la organización hacia acordar con sectores del peronismo de izquierda eran cada vez mayores. El acercamiento de los principales referentes de la organización,

² La relación entre Barrios de Pie y Patria Libre es similar, aunque no idéntica, a la existente entre las agrupaciones piqueteras dependientes de Partidos de Izquierda y éstos últimos. La diferencia radica, aunque en ambos casos la construcción en desocupados es una decisión política, en que el trabajo barrial es una tradición muy arraigada en la Corriente Patria Libre, mientras que en los otros casos, las organizaciones piqueteras fueron creadas por los Partidos una vez que se evidenció su potencialidad política. En este sentido, mientras sí puede decirse que CPL es la expresión partidaria o política de Barrios de Pie, no puede decirse que la existencia de éste último sea solamente un “brazo barrial” del primero.

Humberto Tumini y Jorge Ceballos a núcleos de este espectro político consumó el proceso (en 1997 y 1999, CPL se presenta a elecciones en el Frente de la Resistencia junto con Jorge Reyna y un grupo de viejos militantes de la organización Montoneros).

En 2001, como decíamos, se constituye orgánicamente Barrios de Pie, con una mayor independencia respecto de la CTA y, fundamentalmente, de la FTV (Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat) de Luis D'Elía, organización más directamente vinculada a la anterior. En la medida en que la oposición al gobierno era indudable (tales los casos de De La Rúa, y en menor medida, de Duhalde), el MBP compartió múltiples acciones directas e instancias de coordinación con una multiplicidad de agrupaciones piqueteros de izquierda, incluso las vinculadas a los Partidos de filiación trotskista.

De cualquier manera, es allí en el núcleo de la soberanía nacional, en torno a significantes muy afines a reivindicaciones históricas del peronismo que el gobierno de Kirchner pretende actualizar, que se puede rastrear el hilo de compatibilidad entre este y el MBP que permite dar inicio al acercamiento entre ambos. Es en su perfil ideológico y político (no simplemente en la "ideología" en sentido llano, como mero conjunto de creencias, sino fundamentalmente en la tradición en la que se inscribe el movimiento –la idea de liberación nacional-) donde puede rastrearse la relación de afinidad entre un gobierno y un movimiento social. En este sentido, debe evitarse el comprender las posiciones cercanas al gobierno como un acto de "traición" o de transformismo, en la medida en que no se trata sencillamente de un cambio en los horizontes políticos de un movimiento, sino de la convicción de que buena parte de dichos horizontes son reconocidos e incluso transitados por un gobierno. La profundización de la relación se articula al ritmo en que la relación de afinidad se hace más sustantiva y comienza a contemplar mecanismos de dependencia material.

La conmemoración del estallido social de diciembre de 2001 realizada cuatro años más tarde presentó claras distinciones entre los grupos que apoyan al gobierno de Néstor Kirchner y aquellos que sostienen posiciones críticas a su respecto. De hecho, los primeros realizaron su acto el día 19, tajantemente separados de cualquier medida general que se tomara al día siguiente. Allí, los organizadores, entre los que resalta como uno de los más relevantes el MBP expresaron: "Hoy tenemos un gobierno que se preocupa por el pueblo porque es producto de la lucha popular", al tiempo que remarcaron la importancia de la integración regional latinoamericana³, leída en términos de articulación entre los diferentes gobiernos de la región.

En palabras de un referente de Patria Libre, hoy en Libres del Sur, el proceso de acercamiento del MBP al gobierno tiene varias aristas: intenta expresar la capacidad del campo popular de arrancar concesiones a un Estado más permeable que el de la década anterior, intenta aprovechar el capital simbólico que Kirchner acumula en aquellas cosas con las que el movimiento coincide (disputa con FMI, militares, etc.). En este caso, no es tan relevante para el movimiento si es retórico o real, como la brecha que se abre para plantear estos temas como elemento de trabajo sobre el campo popular.

La afinidad, entonces, aparece ligada a la recuperación de ciertas banderas por parte del gobierno que producen identificación en consignas del movimiento y del campo popular en general. A partir de allí, se revisan las consideraciones previas acerca del Estado y, dando por iniciada una nueva etapa, se apuesta por pelear desde el interior del mismo,

³ Clarín, 20/12/2005.

considerando que allí hay mayor potencialidad que manteniéndose a distancia. Sin embargo, el mismo entrevistado expresa la preocupación del movimiento por la pérdida de autonomía que esto supone y por el cuadro de división general de las distintas expresiones organizativas de los sectores subalternos que la nueva situación ha producido. En tal sentido, la autonomía y confluencia con demás fuerzas políticas es una constante tensión con el gobierno, que se ha expresado públicamente en la oposición del MBP, por ejemplo, tanto a la reelección de Rovira en Misiones como a la elección del rector de la UBA, ambos eventos en los que el gobierno estaba particularmente interesado.

De este modo, el caso del MBP expresa una tensión entre las posibilidades que abre un gobierno progresista y, al mismo tiempo, los límites que encierra. No puede decirse mucho sobre los resultados de esta tensión en el movimiento. Solamente que es notorio su crecimiento, al tiempo que cabe preguntarse por cuánto sus proyectos fundantes permanecen en el horizonte de sentido de la organización

Vemos entonces que una de las dimensiones a través de las cuales las políticas del presente gobierno afectaron la organización de los movimientos piqueteros es el eje de lo que podríamos denominar *tradición*. Allí vemos que los movimientos que provienen del amplio espectro (casi indefinible, por cierto) del “nacionalismo revolucionario”, que incluye a parte del peronismo, cuentan con otros condicionantes a la hora de acercarse a un gobierno. Dicho de otro modo, la especificidad de sus análisis coyunturales se asienta más en el eje Imperialismo-Nación que en la confrontación clasista en sus términos tradicionales. Si bien se trata de una presentación esquemática de la cuestión (y de estos grupos), lo central es que este tipo de lecturas redundan en una toma de posición respecto del Estado que dista de la que toma la izquierda más ortodoxa. En este trabajo, por el alcance que pretende, no se desarrollarán las consideraciones sobre el Estado de los diferentes grupos que reconocen precedente en diferentes vertientes del nacionalismo de izquierda. Alcanza, por el momento, con aclarar que no se lo sopesa prioritariamente como un factor que coadyuve a la dominación capitalista *per se*, sino más bien en su relación con el imperialismo (cuán penetrado se encuentra, etc.). Al mismo tiempo, se reconoce su productividad histórica en la vida de los sectores trabajadores de los países periféricos (material y simbólicamente), por medio de la reivindicación, más o menos intensa según el grupo, de los procesos “populistas”. De allí que no sólo no se rechace al Estado de antemano, sino que se lo considere una instancia privilegiada de articulación y construcción de un proyecto alternativo de país, incluso en términos de socialismo.

¿Puede hablarse de cooptación?

El término cooptación es sumamente complejo como para abordar los casos en que movimientos piqueteros se acercan o incorporan a la gestión estatal. Su contenido resulta un tanto maniqueo para procesos que parecen tener un arraigo más profundo que la mera “seducción”. Al menos en su acepción vulgar, esta noción sugiere un elemento activo y uno pasivo, uno que coopta y otro que *es cooptado*. De este modo, supone una subestimación sobre este último, ya que no considera las razones inmanentes de su acción sino sólo en relación con el poder del otro. Esta lectura suele estar acompañada por la presunción, ya extrema, de “compra” de voluntades a través de cargos públicos. Pues bien, no acordamos con ella, ya que poco dice sobre la eficacia política de la situación contemporánea. El gobierno no incorpora movimientos comprándolos, sino

que efectivamente ha tocado una fibra social que produce identificación en amplios sectores de la militancia. ¿Cómo? Tal como lo adelantamos, recuperando efectivamente parte de los reclamos históricos del campo popular y adentrándose, de ese modo, en sus reivindicaciones.

Como vimos en los casos de acercamiento al gobierno, fundamentalmente en el del Movimiento Barrios de Pie, el proceso puede incluir discusiones internas y es, en última instancia, una decisión política del movimiento. Ahora bien, si descartamos que tanto el MBP como los demás espacios hoy próximos o incorporados al gobierno son cooptados en el sentido más vulgar del término, esto no quiere decir que esta relación de *nuevo tipo* que se establece entre Estado y movimientos sociales no modifique la situación del movimiento piquetero en general, esto es, de la totalidad de las organizaciones que lo componen. Efectivamente se producen allí quiebres y divisiones que tienen por resultado un debilitamiento de su poder de conjunto, tanto en términos de autonomía como de poder de acción conjunta, llegando incluso a darse importantes enfrentamientos en su interior.

De este modo, descartar la cooptación en su acepción más simplista no nos impide comprender que, de todas formas, existen mecanismos complejos de reconducción del conflicto desatado en la Argentina en los últimos años que tienden a normalizarlo y hacerlo compatible con el Estado como instancia privilegiada de articulación social. En tal sentido, podemos recurrir a una idea más compleja de cooptación, no ya de un movimiento o actor particular sino del conflicto en términos generales. Tal es el modo en que puede pensarse a partir del conocido trabajo de Oscar Oszlak *La Formación del Estado argentino* (1982). Allí, es condición para el nacimiento del Estado (hoy podríamos decir, para su reafirmación constante) la institucionalización de un orden, esto es, la capacidad de internalizar el conflicto social, apareciendo como única autoridad de la vida social organizada. Aunque pensados para los orígenes de la formación estatal nacional, estos desarrollos valen también para nuestro presente, ya que dan cuenta de invariantes en la relación Estado y sociedad que en momentos de crisis y reordenamiento de los límites entre ambos, como estos últimos años, alcanzan una notoria evidencia. En este orden se inscribe la llamada “dimensión cooptativa” en la conformación del Estado, consistente en la captación de sectores dominantes del interior del país que coadyuvó a la consolidación del mismo. Algo de eso puede pensarse en nuestra actualidad. La captación de algunos movimientos piqueteros es la forma que asume la cooptación del conflicto social hoy. Philip Selznick (1997), un poco conocido estudioso norteamericano de la administración pública, define a la cooptación como el proceso de absorber nuevos elementos “en el liderazgo o en la política” como medio de evitar amenazas a la estabilidad o existencia del sistema. Algo semejante es lo que se da actualmente entre el gobierno de Kirchner y los movimientos piqueteros que, a su vez, produce modificaciones en el Estado en su conjunto, ya que modifica la fisonomía, el personal y el tipo de acción de sus aparatos.

En este sentido, el problema puede leerse desde una doble perspectiva: del gobierno y del Estado. En el primer caso, se trata efectivamente de una estrategia que tiene sus especificidades tanto para con los movimientos que se acercan como para los demás. Esta, en su conjunto, parece tener como objetivo el afianzamiento del proyecto kirchnerista por medio de la construcción de sólidas bases de apoyo con un horizonte escasamente crítico que permita, al mismo tiempo, marginar a los sectores que no se prestan a apoyar. Así, la autonomía de los movimientos parece ser un blanco

privilegiado de la política gubernamental. En aquellos cercanos al gobierno, se observan distintos grados de voluntad de disputar por preservarla. En cualquier caso, autonomía y revolución pasiva podrían ser considerados dos conceptos en permanente disputa en el escenario argentino contemporáneo, ya que de lo que se trata es de dirimir las fuerzas sociales que encabezen el proceso actual: si lo harán sectores tradicionales, como, a nuestro juicio, tiende a suceder hoy o si distintas manifestaciones del campo popular logran superar los condicionamientos de astutas políticas que desafían permanentemente su capacidad de construir una alternativa propia.

En lo que al Estado refiere, como habíamos adelantado, su fuerza se sustenta en conservar la capacidad de regular el conflicto social. Por ello, y bajo la forma específica que éste asumió en Argentina en el último período, nos encontramos ante un renovado proceso de institucionalización del conflicto social, a través de la normalización de uno de los actores más expresivos de dicho conflicto: el movimiento piquetero. La ruptura, división y absorción de partes de éste no es solamente una estrategia del gobierno, sino también parte constitutiva de la lógica estatal de, por decirlo de algún modo, poner todo lenguaje en sus tiempos y términos, esto es, toda protesta que pueda excederlo es reconducida a términos en que se torne compatible (e incluso funcional). Therborn (1997) plantea este problema en términos de “canalización”. El carácter de clase inscripto en los aparatos de Estado imprime una forma de mediación (no arbitraje sino ejercicio del poder de clase a través del Estado) del conflicto por medio de la cual el Estado tiende a *normalizar* las peticiones y protestas de las clases dominadas. Se trata de la canalización de las demandas populares a través de instituciones y procesos que no provoquen rupturas en el orden dominante. De esta manera, se encuentran canales “seguros” para que las contradicciones no debiliten el dominio.

La forma propia de canalización del Estado capitalista es la constante creación de *alternativas intrasistémicas* al conflicto presentado. De esta forma, las contradicciones son transformadas hacia dilemas solubles dentro del orden existente⁴. Este proceso no es de ninguna manera una desviación consciente por parte del Estado, sino el producto de una lógica estructural, por la cual los propios canales institucionalizados de presentación de demandas suponen una serie de pautas siempre compatibles con el carácter de clase del Estado⁵. Ahora bien, de lo que se trata es de canalización de energías populares, por lo que no debe concebirse a esto como un proceso cerrado. Se trata, más bien, de una permanente disputa de los sectores subalternos por exceder el plano de la normalización que el aparato estatal propone.

Referencias

⁴ Así, el mayor peso que el área de políticas sociales adquirió en los últimos años, y la influencia de algunos movimientos sobre ella puede ser leída como una institucionalización de la lucha piquetero, canalizando sus reivindicaciones más radicales hacia un aumento de la ayuda social.

⁵ Para desarrollar este punto, Holloway (1994) propone una interesante relación entre ciudadanía y administración pública. La teoría y la práctica de la administración pública tienen como supuesto el concepto moderno de ciudadanía, en el sentido de la igualdad formal y la individualización, esto es, que la sociedad es una masa de ciudadanos (abstraídos de su condición de clase). De esta manera, ambas contribuyen al proceso de fragmentación de la lucha de clases, ya que esta es redefinida en términos de demandas civiles.

- Althusser, Louis (1997): “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en La filosofía como arma de la revolución. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Borón, Atilio (2005): “Reflexiones en torno al gobierno de Néstor Kirchner”, en Revista *Periferias* N° 12, Buenos Aires.
- Elías, Antonio (2006): “Ante la expansión capitalista y la retórica progresista: una agenda de cambio institucional”, en Gambina, J. y Estay, J. (comp.): *¿Hacia dónde va el sistema mundial? Impactos y alternativas para América Latina y el Caribe*. Buenos Aires, FISyP.
- Evers, Tilman (1989): *El Estado en la periferia capitalista*. México, Siglo XXI.
- Gramsci, Antonio (2003): *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno*. Buenos Aires, Nueva Visión
- Holloway John (1994): “La ciudadanía y la separación de lo político y lo económico”, en *Marxismo, Estado y Capital*. Buenos Aires, Fichas temáticas de la Revista *Cuadernos del Sur*.
- Mazzeo, Miguel (2004): *Piqueteros*. Buenos Aires, FISyP, Manuel Suárez editor.
- Oszlak, Oscar (1982): *La formación del Estado Argentino*. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- Rajland, Beatriz y Campione, Daniel (2006): “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de los últimos años: novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos”, en *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.
- Schuster, Federico (2004): "Izquierda política y movimientos sociales en la Argentina contemporánea", en P. Barrett y C. González (comp.), *La izquierda latinoamericana*. Buenos Aires, Norma.
- Selznick, Philip (1997): “El mecanismo de cooptación”, en Shafritz, J. y Hyde, A. (comp.): *Clásicos de la administración pública*. México, Fondo de Cultura económica.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2004): *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires, Biblos.
- Therborn, Goran (1997): *¿Cómo domina la clase dominante?* México, Siglo XXI.
- Zavaleta Mercado, René (1988): “La burguesía incompleta”, en *Clases Sociales y Conocimiento*. La Paz, Los Amigos del Libro.
- Zavaleta Mercado, René (1990): “El Estado en América Latina”, en *El Estado en América Latina*. La Paz, Los Amigos del Libro.

Otras fuentes:

- Documentos y boletines de MTD Aníbal Verón y Movimiento Barrios de Pie
- Página Web Movimiento Barrios de Pie
- Página Web Diario Clarín